EL UNIVERSAL
ESTADO DE MÉXICO



Patricia Lozano

Tollocan 944

# Los costos de debilitar la democracia



Las recientes movilizaciones sociales en Francia han vuelto a colocar en el centro del debate público una de las principales tensiones de las democracias contemporáneas: la distancia entre las expectativas ciudadanas y la capacidad de las instituciones para responder a ellas. Miles de jóvenes han salido a las calles para protestar contra el deterioro de los servicios educativos, el encarecimiento de la vida y la incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, detrás de estas reivindicaciones existe una exigencia política más profunda, a saber, participar en las decisiones que determinan sus condiciones de vida.

Estas exigencias enfrentan una realidad compleja. Francia atraviesa una delicada crisis fiscal, caracterizada por elevados niveles de endeudamiento, déficits presupuestarios persistentes y crecientes presiones sobre el gasto público. La capacidad del Estado para sostener y ampliar las prestaciones sociales que históricamente distinguieron al modelo de bienestar europeo enfrenta restricciones cada vez mayores. Este fenómeno, presente también en otras economías, revela una contradicción fundamental, pues mientras las sociedades reclaman mayores derechos, mejores servicios y más espacios de participación, los gobiernos disponen de márgenes financieros cada vez más estrechos para satisfacer esas demandas.

Los hechos recientes permiten reflexionar sobre una cuestión frecuentemente relegada en nuestras discusiones públicas: la democracia implica costos para responder a las expectativas de una sociedad democrática. Garantizar derechos, ampliar la participación ciudadana y mantener instituciones capaces de procesar pacíficamente los conflictos requiere recursos públicos suficientes. Desde luego, ninguna institución debe estar exenta de justificar sus requerimientos financieros. Por el contrario, la eficiencia, la austeridad y la transparencia constituyen obligaciones indispensables. Sin embargo, asignar de manera ineficiente el gasto público puede terminar debilitando las capacidades institucionales que hacen posible el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.

Un ejemplo reciente de este equilibrio es la aprobación, por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, del proyecto de presupuesto para 2027. En la propuesta destaca que los recursos destinados a la operación institucional y organización electoral contemplan una reducción real de 5.5% respecto de 2024. Esto significa que, pese al crecimiento de la lista nominal, que supera los 13.3 millones de personas, el costo operativo proyectado por elector pasaría de 218 pesos en 2021 a 190 pesos en 2027. Se trata de una propuesta racional, construida bajo criterios de eficiencia, planeación y responsabilidad financiera, que busca optimizar los recursos sin comprometer la certeza, la legalidad y la transparencia de los comicios.

*La experiencia francesa nos recuerda que las democracias enfrentan un desafío que trasciende las coyunturas electorales: conciliar las crecientes demandas de participación y bienestar con las limitaciones materiales del Estado*

La experiencia francesa nos recuerda que las democracias enfrentan un desafío que trasciende las coyunturas electorales: conciliar las crecientes demandas de participación y bienestar con las limitaciones materiales del Estado. En materia electoral, ello implica organizar elecciones cada vez más eficientes, accesibles y confiables, sin renunciar a los estándares democráticos alcanzados. Después de todo, el verdadero valor de una elección no se mide exclusivamente por su costo financiero, sino por su capacidad para garantizar que todas las voces puedan expresarse y que los conflictos políticos encuentren una salida institucional. ●